

Desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA, manifestamos nuestra preocupación por la situación que atraviesan el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), el INASE (Instituto Nacional de Semillas), el INAFCI (Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), y la DIPROSE (Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales).

Desde 1956, el INTA cuenta con una destacada trayectoria en la generación y transferencia de tecnología, la investigación y la extensión junto a productores agropecuarios de todo el país. Su labor se acrecentó gracias a la conformación de estaciones experimentales, agencias de extensión, programas como ProHuerta y Cambio Rural, y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (CIPAF).

Desde 1958, el trabajo del CONICET se ha destacado por su calidad y cantidad. Es considerada la primera institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica, y se ubica en el lugar número 20 entre las 1870 instituciones gubernamentales dedicadas a la investigación en todo el mundo.

Desde 1968, el SENASA se encarga de fiscalizar y certificar la calidad e inocuidad de los productos, subproductos, insumos y residuos del sector agropecuario. También abarca la aplicación del Código Alimentario Argentino.

El INASE, creado en 1978 como Servicio Nacional de Semillas, cumple la función de fiscalizar y controlar la calidad e inocuidad de las semillas y las creaciones fitogenéticas, y es la autoridad de aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.

El INAFCI fue creado el año 2022, sobre la base de una trayectoria de trabajo iniciada el año 1993 por el Programa Social Agropecuario, y continuada por la Secretaría de Agricultura Familiar. Su reciente eliminación pone en riesgo la continuidad de más de 30 años de trabajo junto a más de 250 mil familias de comunidades rurales.

La DIPROSE, creada el año 2018 sobre la base de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), trabaja desde hace más de 25 años financiando los programas de desarrollo rural de todo el país con el financiamiento de organismos internacionales. Actualmente, con una cartera de más de U\$S 1.700 millones, es la principal fuente de recursos para desarrollar obras de agua, infraestructura y conectividad, y dotación de tecnología e insumos.

El entramado de instituciones mencionado está padeciendo el despido de sus trabajadores, el desfinanciamiento de sus actividades, y en el caso de la DIPROSE y el INAFCI el riesgo de desaparición. El trabajo conjunto que abordan en materia de apoyo técnico, acompañamiento y financiamiento a los productores de la agricultura familiar, campesina e indígena fortalecen su acceso a los componentes de la riqueza de los territorios rurales, para que puedan ser demandados y ofrecidos en mercados a los cuales accede toda la comunidad.

La reducción de estos espacios institucionales desvirtúa la participación democrática directa de todos los productores de alimentos en la política de desarrollo agropecuario. Si no defendemos este trabajo, en muchos casos sostenido por estudiantes, docentes y graduados de nuestra casa de estudios, la pobreza puede modelar las formas de vida, expectativas, visiones y proyectos de cientos de miles de familias rurales en un continuo estado de precariedad. La solidaridad aparece como planteo para superar la experiencia de la precariedad, y rompe la mirada utópica sobre la autorregulación de un mercado libre de interferencias y regulaciones estatales y/o sociales. Los pilares fundamentales para la conformación de asociaciones formales e informales de la agricultura familiar, campesina e indígena son, por lo tanto, los principios de asociatividad, cooperación, solidaridad, autogestión, reciprocidad y democracia. Se reconocen los productos y servicios a través de una retribución justa, y de la valoración de su contribución a la sociedad con condiciones dignas de trabajo.

Trabajar con la agricultura familiar, campesina e indígena desde la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía social, es posible en la multiplicidad de instituciones estatales mencionadas. Las mismas flexibilizan y rediseñan los planteos técnicos en función de las experiencias exitosas, fallidas y/o con dificultades para sostenerse en el tiempo. La jerarquización de la agricultura familiar, campesina e indígena, y su integración gracias al diseño de programas específicos de apoyo técnico y financiamiento, visibilizaron a un sector postergado y agilizaron el emprendimiento de múltiples estrategias para desarrollar los territorios rurales, incluyéndolos como sujetos políticos y agentes económicos relevantes.

Históricamente nos hemos preguntado ¿qué política de desarrollo agropecuario resulta más eficiente? Ahora se nos pregunta ¿debe haber una política de desarrollo agropecuario? Desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA consideramos que sí, y que de ninguna manera puede desatender a ninguna de las instituciones mencionadas, y a su labor con la agricultura familiar, campesina e indígena con la Soberanía Alimentaria como horizonte.

